

**Comunicado de prensa**  
**Para publicación inmediata**

**70 grupos de la sociedad civil llaman al presidente ecuatoriano a poner fin a la persecución de la sociedad civil y los activistas indígenas**

Setenta organizaciones latinoamericanas e internacionales de la sociedad civil han firmado una [carta](#) en la que instan al Presidente de Ecuador, Rafael Correa, a involucrar de modo constructivo a las comunidades indígenas que se oponen al desarrollo de proyectos extractivos en sus tierras. La carta también demanda la remoción de todas las disposiciones legales y medidas de política pública que limitan el ejercicio de las libertades fundamentales de asociación, reunión y expresión de estas comunidades.

“El gobierno ha respondido a las legítimas demandas de consulta de las comunidades indígenas con represión y crecientes restricciones sobre las libertades fundamentales”, afirmó Marlon Vargas, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE). “Los líderes comunitarios y organizaciones indígenas que resisten los avances de las industrias extractivas y exigen la implementación de mecanismos de consulta para la expresión del consentimiento libre, previo e informado de sus comunidades están siendo permanentemente criminalizados y acosados judicialmente”, agregó Vargas.

Recientemente, en el contexto de las protestas y el activismo desarrollados por las comunidades indígenas Shuar en oposición a las actividades mineras en la región amazónica del Ecuador, el gobierno ha declarado el estado de emergencia suspendiendo las libertades básicas en la provincia de Morona Santiago y amenazado con disolver Acción Ecológica, una reputada organización ecuatoriana que lleva casi 30 años defendiendo los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos de los pueblos.

La carta destaca las cuestiones siguientes :

- Los abusos cometidos contra la comunidad Shuar de Nankints, a la cual le fue negado el derecho de consulta y fue desalojada para abrir paso a un emprendimiento minero, reprimida cuando intentó recuperar su territorio, y criminalizada luego de que los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que custodiaban el nuevo campamento minero produjeran víctimas fatales.
- El estado de emergencia decretado en la provincia de Morona Santiago, bajo el cual se reforzó la presencia militar en las comunidades Shuar, se suspendieron las libertades básicas y se sembró el terror entre los habitantes.
- La amenaza de iniciar un proceso de disolución contra Acción Ecológica, en represalia por su labor de sensibilización acerca de los impactos ambientales de los proyectos mineros y la falta de consulta con las comunidades indígenas.
- La necesidad de que la legislación que actualmente permite la disolución arbitraria de organizaciones de la sociedad civil —que incluye a los decretos ejecutivos No. 16 y No.

739- sea derogada y reemplazada por una Ley de ONG que elimine todas las restricciones indebidas sobre la libertad de asociación.

“En los últimos años, el gobierno de Ecuador ha atacado cada vez más a la sociedad civil disidente y se ha extralimitado afectando las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión”, afirmó Inés Pousadela, Oficial de Políticas e Investigación de CIVICUS. “Es nuestro deber expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Ecuador y demandar al gobierno el cumplimiento de sus compromisos constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos”.

Los firmantes de la carta urgen al gobierno de Ecuador a implementar mecanismos de consulta con las comunidades indígenas, abstenerse de criminalizar a los líderes y organizaciones comunitarias indígenas que desafían los proyectos de la industria extractiva, y reemplazar la legislación restrictiva vigente por una Ley de ONG en línea con las normas constitucionales y los estándares internacionales sobre libertad de asociación.

El espacio cívico en Ecuador está clasificado como obstruido en el [CIVICUS Monitor](#).

***Para más información, favor de contactar a:***

Deborah Walter  
Gerente de Comunicaciones  
CIVICUS  
[deborah.walter@civicus.org](mailto:deborah.walter@civicus.org)

Inés Pousadela  
Policy and Research Officer  
CIVICUS  
[ines.pousadela@civicus.org](mailto:ines.pousadela@civicus.org)